



INFORME DE COYUNTURA POLÍTICA

WWW.LYD.ORG

ISSN 2735-7589

N° 48
JUNIO 2026

Contenido

TEMA DEL MES: AJUSTE DE PRIORIDADES DEL GOBIERNO	3
CHILE BAJO LA LUPA: EL PROMEDIO DE APROBACIÓN	5
ALERTA CONCEPTUAL: EL CONCEPTO “CRIMINALIZACIÓN”: ELEMENTO CENTRAL DE UN MARCO ESTRATÉGICO	8

Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo.
Responsable: Rodrigo Ubilla rubilla@lyd.org

TEMA DEL MES

AJUSTE DE PRIORIDADES DEL GOBIERNO

La primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast no se limitó a cerrar la etapa de instalación, la reordenó. El Ejecutivo la usó como línea divisoria entre un antes y un después, dejó atrás un período de errores no forzados e intentó desplazarse hacia un conjunto de causas de amplio respaldo popular. Estas últimas son las mismas que en campaña diferenciaron al hoy Presidente, como el control migratorio, el respaldo a Carabineros y a las Fuerzas Armadas y -como componente social acotado, pero deliberadamente popular- el proyecto de Sala Cuna Universal.

El objetivo ha sido ordenar al Gobierno, priorizar su agenda y reducir la confrontación directa con la ciudadanía en materias sensibles, por ejemplo, el alza de los combustibles. Este giro intenta reconfigurar la agenda en torno a ejes de adhesión masiva, por lo que define el terreno donde se desarrolla la disputa política. El movimiento ya tuvo un efecto medible: detuvo la caída de adhesión que el Gobierno venía arrastrando.

La pregunta relevante no es si el oficialismo acertó en cada medida, sino qué ocurre con la disputa política cuando se instala en el terreno donde las preferencias ciudadanas son más nítidas y favorables al proyecto. Lo que ocurre es un desplazamiento de la carga: el Ejecutivo traslada sobre la oposición el peso de la diferenciación. En un sistema fragmentado, donde la identidad de cada bloque depende de su distancia frente al resto, ese peso resulta estructuralmente costoso, ya que diferenciarse de un Gobierno que defiende causas altamente respaldadas, obliga a posicionarse en contra de lo que la mayoría comparte.

En ese contexto, un concepto como *criminalización de la protesta* -que la Alerta Conceptual de esta edición desarrolla en detalle-, adquiere un rol central, porque permite cuestionar políticas de amplio respaldo sin discutir su contenido y trasladar el debate hacia sus implicancias simbólicas. Es la vía por la cual la oposición busca victorias en donde carece de respaldo popular.

El 15 y 16 de junio el Ejecutivo ingresó el proyecto de Registro Nacional de Vándalos e Incividades, con 33 faltas o delitos sancionados con la inclusión en el padrón. Los reparos llegaron de inmediato. El diputado Luis Cuello (PC) hizo reserva de constitucionalidad, mientras que Raúl Leiva (PS) advirtió que el registro alcanzaría incluso a quienes realicen rifas de organizaciones sociales sin autorización. Este tipo de objeciones termina desplazando a la oposición hacia una discusión sobre proporcionalidad, cuando la norma se instala en el terreno más popular: recuperación del orden público.

La dificultad opositora no es táctica, sino de identidad. El terreno del orden fue durante años codificado como patrimonio del adversario y buena parte de la izquierda construyó la suya en oposición a él, desde la lectura del estallido social hasta la desconfianza frente a la actuación policial. Cuando el Gobierno lo ocupa, esa izquierda queda ante una elección incómoda entre contradecir su trayectoria o sostener posiciones minoritarias. La tensión no es nueva. Ya se vio durante el Gobierno del Presidente Boric, cuando la tramitación de varios proyectos de seguridad obligó a parte de la izquierda a respaldar medidas que antes había resistido o a quedar en minoría defendiendo su rechazo.

El patrón se repite en cada frente. El rechazo al Registro de Vándalos la empuja hacia los reparos jurídicos y la expone a aparecer defendiendo lo que la norma busca sancionar. El intento de la modificación de la ley Naim-Retamal corre la misma suerte, porque revisar el concepto de uso de la

fuerza policial en pleno auge de la demanda por orden ubica a quien la promueve contra el sentir mayoritario. Con todo, el efecto no es uniforme, porque la oposición está fragmentada y el giro profundiza esa fractura. Para la izquierda identitaria, el Frente Amplio y el Partido Comunista, la diferenciación es constitutiva del proyecto, y por eso el costo de converger con el oficialismo en seguridad o migración resulta alto.

La centroizquierda dispone de mayor margen. Acompañar selectivamente esas causas no compromete su identidad de fondo y hasta podría rendirle ante un electorado menos ideologizado. El problema es que no ha sabido usarlo. La “tironean” por un lado el Frente Amplio y el Partido Comunista y, por el otro, la demanda ciudadana por el orden. Entre ambos no ha encontrado un posicionamiento propio que la distinga de la izquierda dura. Su eje de conflicto ya no es la diferenciación ideológica, sino su capacidad de adaptarse a las nuevas prioridades, lo que debería empujarla hacia acuerdos puntuales con el Gobierno. El ministro Alvarado leyó esa grieta y emplazó en público al Socialismo Democrático a decidir al margen de la tutela del Frente Amplio y el Partido Comunista, fractura que el Ejecutivo busca ensanchar. Más que la postura frente a cualquier proyecto puntual, ese clivaje interno definirá la capacidad opositora de articular un bloque cohesionado.

Nada de esto asegura la posición del oficialismo. Hasta ahora el giro consiguió detener la impopularidad que arrastraba el Gobierno y su gestión -lo que no es menor-, pero contener el deterioro no equivale a recuperar respaldo. Todavía es prematuro saber si esa contención se transformará en una recuperación efectiva. Alinearse con el grueso de la opinión pública puede ordenar el conflicto a su favor, pero esa sintonía solo rinde capital político si el Gobierno la convierte en adhesión propia, y eso depende de la gestión. Apropiarse de demandas ciudadanas obliga, además, a responder por ellas. El Ejecutivo ordenó el campo de batalla, no por ello reducirá la distancia entre el anuncio y el resultado.

Mientras el debate permanezca en el plano simbólico, el oficialismo se beneficia del nuevo posicionamiento. Pero si las expectativas no aterrizan en resultados visibles, el mismo terreno que hoy expone a la oposición puede volverse fuente de desgaste para el Gobierno, y la brecha entre relato y gestión dejará de ser un problema comunicacional para volverse político. Lo que viene depende de si cada actor cumple su parte. El Gobierno debe convertir el control del relato en capacidad de ejecución antes de que esa brecha erosione su respaldo. La oposición debe decidir si persiste en el bloqueo que la enfrenta a la mayoría o si construye una alternativa en el plano de las preocupaciones ciudadanas. Esa segunda vía exige una separación de aguas entre la izquierda dura y la centroizquierda que por ahora no se observa. De cómo se resuelva esa doble prueba dependerá, más que el cierre de una coyuntura, la calidad del debate público y las condiciones de gobernabilidad de los próximos meses.

CHILE BAJO LA LUPA

EL PROMEDIO DE APROBACIÓN

El Gobierno de José Antonio Kast registró la “luna de miel” más corta de las que se tenga registro, con un 57% de aprobación en su primera medición Cadem (13 de marzo). Factores como el alza importante en el precio de los combustibles y los problemas de comunicación del Gobierno fueron erosionando ese respaldo inicial de manera sostenida durante los primeros meses.

Sin embargo, como muestran los promedios mensuales de aprobación, la tendencia descendente parece haberse estabilizado. En Cadem, la aprobación pasó de 51% en marzo a 42% en abril y 39% en mayo, pero en junio repuntó a 42%. Critería refleja un patrón similar, con una caída de 47% en marzo a 38% en abril y 37% en mayo, seguida de una recuperación a 39% en junio. El promedio general del período se sitúa en 43% de aprobación y 52% de desaprobación en Cadem, y en 39% de aprobación y 49% de desaprobación en Critería. Para el cálculo de estos promedios se consideraron las mediciones disponibles hasta el 19 de junio en Cadem y hasta el 21 de junio en Critería.

Con esta aprobación cercana al 40%, como promedio del período y una desaprobación del orden del 50%, el gobierno ha adoptado una estrategia de retención y consolidación de una parte importante de su base electoral levantando propuestas y consolidando un discurso cada vez más cercanos al de la campaña electoral.

Agenda con aceptación ciudadana

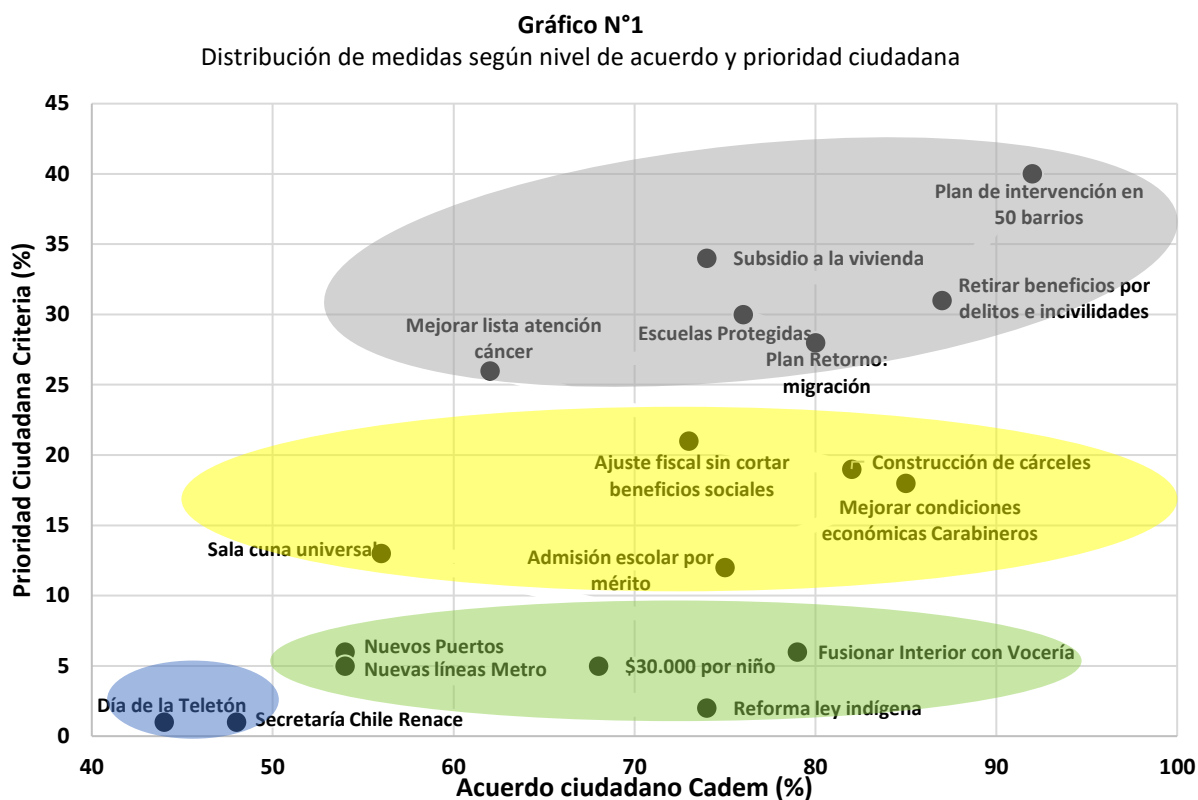
Esta estabilización no parece ser casual, ya que coincide con una mayor sintonía entre la agenda del Gobierno y las prioridades de la ciudadanía, como lo evidencia el alto respaldo que obtuvieron las medidas presentadas en la Cuenta Pública. La encuesta Cadem del 2 de junio midió el grado de acuerdo o desacuerdo de las propuestas presentadas y la encuesta Critería del 7 de junio consultó respecto a si la población las consideraba importantes, pidiendo seleccionar las tres más valoradas.

Sobre ambas preguntas se construyó un gráfico de coordenadas que sitúa el porcentaje de acuerdo ciudadano (Cadem) en el eje X y el nivel de prioridad (Critería) en el eje Y, permitiendo observar de forma directa la sintonía entre las medidas presentadas por el Gobierno y las preferencias de la ciudadanía.

Aunque la formulación de las propuestas no es idéntica en ambas encuestas, los resultados son comparables en la medida en que ambas identifican con claridad lo planteado en la Cuenta Pública, reduciendo los sesgos no muestrales. El siguiente gráfico muestra la distribución de las 18 medidas según su nivel de acuerdo y prioridad ciudadana, divididas en cuatro áreas de dispersión definidas a partir de ambas dimensiones.

El acuerdo ciudadano es alto de manera casi transversal, con la gran mayoría de las medidas situadas entre el 55% y el 95%, lo que reduce su capacidad para diferenciar los grupos entre sí. Por ello, prevalece usualmente el eje de prioridad, que estructura la clasificación. El primer grupo, de *alineación fuerte*, concentra las medidas con prioridad superior al 25%, con nivel de acuerdo elevado. El segundo, de *alineación moderada*, agrupa aquellas con prioridad entre el 10% y el 20%, manteniendo igualmente un acuerdo elevado. El tercer grupo, de *alineación baja*, reúne medidas con prioridad entre el 0% y el 10%, pero con acuerdo todavía alto. El cuarto grupo, *sin alineación*, es el único donde ambas dimensiones caen simultáneamente: prioridad inferior al 3% y acuerdo que no supera el 50%, lo que lo distingue cualitativamente del resto.

En términos generales, el diagnóstico del gobierno sobre los intereses ciudadanos parece haber sido adecuado, dado que la mayoría de las medidas concentran niveles de acuerdo amplios.



Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas Cadem 660 (02 de junio) y Criterio (07 de junio).

Alineación fuerte (conjunto sombreado gris)

Las seis medidas que superan el umbral de alineación fuerte combinan un acuerdo ciudadano sólido con una alta prioridad. La medida que lidera es el *Plan de Intervención Intensivo en 50 barrios críticos en seguridad* (92% de acuerdo, 40% de prioridad), siendo la propuesta con mejor sintonía entre Gobierno y ciudadanía. *Quitar beneficios sociales a quienes cometan delitos o incivildades* (87% y 31%), *Subsidio a la vivienda para la clase media* registra (74% y 34%), *Escuelas Protegidas* obtiene (76% y 30%), *Plan Retorno para incentivar la salida de inmigrantes irregulares* presenta (80% y 28%), finalmente, *Priorización de cáncer en listas de espera* muestra (62% y 26%). Que estas medidas provengan de distintos ámbitos indica que la agenda no se percibe como unidimensional, sino que también conecta con una demanda social concreta fuera de seguridad.

Alineación moderada (conjunto sombreado amarillo)

Contiene medidas que, a pesar de tener un amplio acuerdo, no tienen una alta prioridad ciudadana. *Mejorar condiciones económicas a Carabineros que postulan a la Escuela de Formación* alcanza (85% y 18%), *Duplicar la construcción de cárceles* registra (82% y 19%), *Realizar un ajuste fiscal profundo sin cortar beneficios sociales* obtiene (73% y 21%), *Admisión escolar por mérito* presenta (75% y 12%), *Sala cuna universal* muestra (56% y 13%). Aunque estas medidas muestran menor prioridad que el grupo anterior, el acuerdo elevado combinado con una prioridad media les otorga una condición estratégica para buscar nuevas adhesiones en la ciudadanía.

Alineación baja (conjunto sombreado verde)

Este grupo concentra medidas donde existe acuerdo ciudadano, pero la prioridad es muy baja. *Fusionar el Ministerio del Interior con Segegob y Vocería* (79% y 6%), *Expandir y modernizar los puertos de Valparaíso y San Antonio* (54% y 6%), *Dar continuidad a la construcción de nuevas líneas del Metro* (54% y 5%) y la *Transferencia de 30 mil pesos mensuales por hijo a familias vulnerables* (70% y 5%). Por último, con la menor prioridad del grupo, aunque con un acuerdo significativo, se encuentra la *Reforma a la ley indígena* (74% y 2%). Lo distintivo de este grupo es que, sin generar rechazo ciudadano, la prioridad desciende tan drásticamente que estas medidas carecen de capacidad de impactar significativamente en la evaluación ciudadana.

Sin alineación (conjunto sombreado azul)

Las dos medidas con menor acuerdo y prioridad son la excepción del patrón general observado: a diferencia del resto, no generan sintonía con la ciudadanía en ninguna de las dos dimensiones analizadas. Se identifica un bajo acuerdo ciudadano y una prioridad mínima para las medidas como *Establecer el Día de la Teletón*, que registra (44% y 1%) y *Crear la Secretaría Chile Renace para enfrentar la baja natalidad* (48% y 1%). Ambas son las más desconectadas. La ciudadanía no se opone a estas medidas, pero tampoco las percibe como relevantes y no tendrían un impacto de mayor importancia para el Gobierno.

ALERTA CONCEPTUAL

EL CONCEPTO “CRIMINALIZACIÓN”: ELEMENTO CENTRAL DE UN MARCO ESTRATÉGICO

En la discusión política el concepto de “criminalización” se ha instalado como un eje discursivo de la oposición. Mientras la CONFECH habló de la “criminalización de los movimientos estudiantiles en general”, en la revista UTE USACH se profundizó esta tesis aplicada a las manifestaciones sociales¹. En la misma línea, la senadora Claudia Pascual (PC) afirmó que la iniciativa legislativa de Escuela Protegida “prioriza un enfoque de criminalización por sobre uno educativo y preventivo”.

El concepto de “criminalización” es una formulación que cumple un fin estratégico: simplifica la realidad para producir un efecto político. Los académicos David Snow y Robert Benford plantearon que este tipo de estrategias, la formación de marcos interpretativos, operan mejor cuando se conectan valores socialmente aprobados con los temas a discutir². Aquí, la protesta se valida como forma legítima de incidencia política, mientras que la violencia al interior de las escuelas y una normativa específica que apunte a su control aparecen como temas vetados. El encuadre pretende borrar la distinción entre disidencia política y vandalismo, ubica al Estado como agresor y pondera su acción como una forma de represión.

Coordinar a la minoría, desplazar el conflicto a otros espacios

Lo realmente crítico es que el encuadre no necesita convencer a la mayoría para ser efectivo, le basta movilizar a una minoría organizada y desplazar el debate hacia instancias donde la mayoría no pesa. Frank Baumgartner y Brian Jones llamaron a esta maniobra *venue shopping*, que es cuando un actor que pierde en una arena de decisión, en este caso la opinión pública y en la votación legislativa, traslada el conflicto a donde le resulte más favorable³, como por ejemplo la calle y desde ese escenario generar masa crítica para insistir en las tesis originales.

La derrota legislativa se reconvierte así en una disputa de principios ante una nueva instancia de presión, donde el encuadre de “criminalización” resuena mejor que en el pleno de la sala. Opera como herramienta de coordinación interna, ya que cohesiona a la base propia, dota de lenguaje crítico a las redes organizadas y, sobre todo, intenta elevar el costo reputacional de respaldar la norma por parte del oponente.

Consecuencias para la deliberación pública

Cuando el debate se estructura bajo el marco de la “criminalización”, respaldar la medida puede transformarse en una señal de identidad políticamente costosa. Como observó Noelle-Neumann, las personas suelen ocultar opiniones que perciben como socialmente sancionadas. El resultado es que muchas veces preferencias compartidas por la ciudadanía quedan subrepresentadas en la discusión pública, dificultando la construcción de consensos y distorsionando la percepción del apoyo real a una

¹ CONFECH, comunicado oficial, 4 de mayo de 2026; CONFECH, “Criminalización del movimiento estudiantil: la CONFECH rechaza el proyecto de ley Escuelas Protegidas”, Corporación UTE USACH Noticias, 12 de abril de 2026

² David Snow y Robert Benford, “Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization,” *International Social Movement Research*, vol. 1 (1988), p. 198.

³ Frank R. Baumgartner y Bryan D. Jones, *Agendas and Instability in American Politics* (Chicago: University of Chicago Press, 1993), cap. 2.

política o acción específica⁴. Esto es lo que pasó en octubre del 2019 cuando distintos sectores apoyaron, justificaron o guardaron silencio frente a los actos de violencia ocurridos en el país.

Ahí está la alerta. El respaldo ciudadano a medidas legislativas impulsadas por el Gobierno que apuntan a mejorar los niveles de seguridad y el orden público, y el rechazo de parte de la izquierda a dichas propuestas legislativas han ocurrido al mismo tiempo. Esa simultaneidad materializa y evidencia el problema: los consensos ciudadanos reales quedan invisibles bajo el desacuerdo organizado de una cúpula política y se usan construcciones narrativas para intentar quitar el piso a una medida con apoyo real. Ahora bien, identificar el mecanismo no equivale a desestimar las inquietudes de contenido que se puedan plantear, que merecen ser evaluadas en sus propios términos. Equivale a exigir que, en una democracia, los instrumentos de política pública sean juzgados por sus méritos, no por el nombre con que se los combate. De lo contrario, el riesgo no es solo que una norma termine frustrada, es la normalización de un modo de deliberar en el que el volumen de una minoría coordinada sustituye al juicio sobre el contenido.

⁴ Elisabeth Noelle-Neumann, *The Spiral of Silence: Public Opinion, Our Social Skin* (Chicago: University of Chicago Press, 1984), pp. 5 a 7.